

SENTENCIA No 15-98. TRIBUNAL ADUANERO NACIONAL. San José, a las ocho horas treinta y tres minutos del once de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Alejandro Méndez González., agente aduanero persona natural, No 200, contra la resolución No. DCF – 033 – 96 de las nueve horas treinta minutos del veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Director General de Aduanas.

RESULTANDO

1- Que mediante resolución No DCF - 021 – 96 del 22 de julio de 1996, la División de Control y Fiscalización de la Dirección General de Aduanas, realiza traslado de cargos a fin de realizar ajuste al valor declarado en la declaración de importación definitiva No 201331 del 16 de abril de 1996 de la Aduana Central, al considerar que los valores declarados y los aceptados por la aduana son incorrectos. La declaración aduanera fue presentada por el agente aduanero persona natural, Alejandro Méndez González y como consignatario aparece el señor Henry Juttner Ramírez, cédula de identidad 4-080-361.

2- El afectado impugna la resolución citada a través de escrito con fecha 02 de setiembre, alegando que no se especifica las razones y fundamento que motivan el traslado de cargos quedando indefenso por lo que solicita anular todo lo actuado. Agrega que declaro el valor de acuerdo al dato que aparece en el libro negro del mes de marzo y actuó conforme lo dispone la circular DNP – 059 – 95.

3- Que mediante resolución No DCF – 033 – 96 del 24 de setiembre de 1996, la Dirección General de Aduanas ratifica el traslado de cargos y comisiona a la Contabilidad de la Aduana Central para que efectúe el débito correspondiente. Fundamenta su decisión, al indicar que los valores no se ajustan a la Ley de Valor y su Reglamento respecto del concepto de precio normal, agrega que arriba a esa conclusión, después de analizar y confrontar la importación que ampara la declaración de marras con importaciones de mercancías también idénticas o similares y que tuvo a la vista registros de mercancías también idénticas y similares, además que los valores declarados no concuerdan con los que constan en la base que posee la aduana. Señala en la parte dispositiva, que de “...conformidad con el artículo 175 Código Uniforme Centroamericano, contra esta resolución cabrá el recurso de apelación ante el Comité Nacional de Valoración Aduanera, que deberá interponer por escrito ante el Director General de Aduanas, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación respectiva”.

4- Que el recurrente interpone recurso de apelación y manifiesta que la Dirección General de Aduanas no indica la fecha del libro negro del cual toma los valores y que no acepta otros valores que no sean los de marzo por la declaración del mes de abril. Solicita anular la resolución.

5- Cabe informar que la Dirección General de Aduanas remitió a este Tribunal, un legajo separado en el que se apela por el mismo Agente Aduanero la resolución DCF – 077 – 97 del 14 de febrero de 1997, la cual trata el mismo asunto que se conoce en la sentencia que se dictará, considerando que se debe a un error haber levantado dos expedientes y remitirlos a esta instancia, por lo que se integra este recurso al expediente principal.

5- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Lic. Luis Alberto Gómez Sánchez; y,

CONSIDERANDO

1- Estima este Tribunal una vez analizado el expediente administrativo, que la autoridad aduanera inició el procedimiento administrativo fundamentado en una legislación que no es la que debió observar, generando con ello una violación del debido proceso por la no aplicación del procedimiento ordinario establecido en la Ley General de Aduanas, lo que conlleva una nulidad procesal, por violación de los artículos 134, 158 y siguientes concordantes, y 223 de la Ley General de la Administración Pública. La Ley General de Aduanas dispone en el artículo 258 sobre la vigencia, que la misma “... entrará en vigor el

mismo día en que entre a regir, para Costa Rica, el Protocolo de Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II, del Tratado General de Integración Económica...” y siendo que este rige a partir del 01 de julio de 1996, la ley tiene vigencia desde esa fecha.

Sobre este particular, es importante hacer ver que el procedimiento de ajuste del valor se inició de oficio por la autoridad aduanera competente el 22 de julio de 1996, siendo que para entonces, la ley de reiterada cita tenía veintidós días de estar en vigor.

Es importante hacer la observación de que el Transitorio IV del cuerpo jurídico citado, es claro al señalar “... los despachos, los procedimientos, plazos y las demás formalidades aduaneras, iniciados antes de la entrada en vigencia de esta ley, se concluirán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de iniciarlas...”. (la negrita no es del original). Interpretando la norma transcrita a contrario sensu, todos los procedimientos administrativos abiertos después de la entrada en vigencia de la Ley General de Aduanas, deben necesariamente desarrollarse, observando las normas que sobre el particular esta dispone, lo contrario conlleva la nulidad de lo actuado por vicios en el procedimiento que son insubsanables.

Por otra parte no debe confundirse el transitorio comentado con el Transitorio III de la misma ley, que dispone por el contrario, que todas aquellas reclamaciones y recursos interpuestos antes de la entrada en vigencia de la ley, se desarrollaran de acuerdo con las disposiciones vigentes a la fecha de interponerlos y como ya se indicó en el caso subexamine, no estamos frente a una reclamación o recurso interpuesto por un administrado.

2- Debe observarse además, que si bien es cierto el despacho aduanero se dio en el mes de abril de 1996, antes de la entrada en vigencia de la ley de reiterada cita, la apertura del procedimiento y notificación al interesado se realizan después de la entrada en vigencia de esta. Tampoco podría interpretarse en forma amplia que el procedimiento conforma parte del despacho, porque la misma ley dispone en el artículo 251 relativo a las definiciones lo que debe entenderse por despacho aduanero y a la letra dice “ despacho aduanero: conjunto de operaciones y actos necesarios para cumplir con un régimen aduanero; concluye con el levante o la disposición de las mercancías”.

3- Es claro que nos encontramos frente a un vicio de nulidad absoluta por una inexacta aplicación de la normativa aplicable, dado que la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo está fundamentada en los artículos 14 y 15 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA I) y 145 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuando lo correcto es apoyarse en la normativa especial vigente al momento de incoar el procedimiento, específicamente en los ordinales 192 y siguientes concordantes de la Ley General de Aduanas.

4-. Ubicándonos en el tiempo y de acuerdo a la fecha del recurso que se conoce y siendo que a partir del 01 de julio de 1996, entra a regir una nueva legislación en materia aduanera, tanto a nivel regional (CAUCA II) como nacional (Ley General de Aduanas y su Reglamento), no existía fundamento jurídico para aplicar el procedimiento previsto en el CAUCA I y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios al caso en estudio, sino la nueva ley regional y nacional que es especial sobre la materia.

5- Se manifiesta la indefensión al aplicar un procedimiento diferente al que corresponde, por ejemplo, al limitarse la posibilidad de la audiencia oral y privada establecida en el ordinal 196, al otorgarse un plazo inferior para la interposición de la apelación de acuerdo al 204 y no otorgarse el emplazamiento para ampliar la defensa, dispuesto en el ordinal 203, todos de la Ley General de Aduanas y que no están contenidos en la normativa aplicada al caso por el a quo. Todo lo anterior nos lleva a concluir que se limitó de esta forma una defensa plena al apelante.

6- Cabe destacar que la Sala Constitucional ya ha vertido pronunciamiento sobre este punto en particular señalando: “...La nulidad absoluta es evidente y manifiesta, en general, cuando resulta clara de la mera confrontación del contenido del acto con la ley, sin necesidad de comprobar los hechos en que se funde ni de una interpretación elaborada de su texto o de la ley; o como bien ha dicho la propia Procuraduría, por ejemplo, en su dictamen No C – 140 – 87 del 14 de julio de 1987, esa nulidad absoluta evidente y manifiesta existe en tres tipos de actos: “ a)... b)... c) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Sobre este último supuesto señalo: “incluye aquellos casos en que, si

bien la administración ha observado un procedimiento, no ha sido el que expresamente prevé el ordenamiento para el caso concreto” (Voto No 5653-93 del 05 de noviembre de 1993).

La doctrina también es conteste en la posición anterior, y llama la nulidad absoluta como “de pleno derecho”. Se apunta sobre el particular: “...la nulidad de pleno derecho resulta ser entonces de orden público, lo cual explica que puede ser declarada de oficio por la propia administración e incluso, por los Tribunales, aún en el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaración. Este carácter de orden público de la nulidad de pleno derecho, explícitamente consagrado por la jurisprudencia...supone además, que su pronunciamiento debe hacerse en todo caso en forma preferente, y aún excluyente, con respecto a cualquier otro, incluidos los relativos a la admisibilidad misma del recurso...el tribunal esta facultado, y obligado, a declarar de oficio, por propia iniciativa, la nulidad del acto en todo caso, en interés del orden general, del orden público, del ordenamiento mismo que exige que se depuren en cualquier momento los vicios cuya gravedad determina la nulidad de pleno derecho del acto al que afectan...” (García De Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, pag. 571).

De acuerdo a lo expuesto, a los ordinales 134, 158 y siguientes concordantes y, 223 de la Ley General de Administración Pública y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional citada y la pretensión del recurrente, lo procedente es declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado. Por innecesario no se entran a conocer los argumentos del recurrente.

POR TANTO

Este Tribunal de conformidad con el artículo 91 del Código Uniforme Centroamericano, 204, 205 y 208 de la Ley General de Aduanas resuelve: declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente caso. Se devuelve el expediente administrativo a la oficina de origen para lo correspondiente. Notifíquese a la Dirección General de Aduanas en sus oficinas centrales y al señor Alejandro Méndez González en la Peregrina, La Uruca, San José, casa N° 586.

Licda. Loretta Rodríguez Muñoz
Presidenta

Lic. Desiderio Soto Sequeira

Licda. Shirley Contreras Briceño

Licda Alejandra Céspedes Zamora

Lic. Dick Reyes Vargas

Licda. Elizabeth Barrantes Coto

Lic. Luis Gómez Sánchez

Nota del Lic. Dick Reyes Vargas: No comparto lo indicado en el párrafo dos del considerando seis por cuanto si bien dicha premisa es cierta respecto de la nulidad absoluta y la administración activa, también es cierto que con fundamento en los principios de eficacia, oficiosidad y economía procesal, la Ley General de Administración Pública en sus numerales 180, 181 y 184, este Tribunal no esta legitimado para declarar de oficio una nulidad sino en virtud de recurso y dentro del límite de las pretensiones de las partes como se alega en el presente caso. Por ello es que concurro en la nulidad de la resolución recurrida.

Lic. Dick Reyes Vargas